

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, catorce (14) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	KARINA SOFÍA ARRIETA ESPÍTA
DEMANDADA	ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS ESIMED S.A.
RADICADO UNICO NACIONAL	05001310501620190065701
TIPO DE PROCESO	ORDINARIO DE DOBLE INSTANCIA
DECISIÓN	REVOCA
ACTA DE DECISIÓN	367

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, proceden en esta oportunidad a resolver la apelación interpuesta por la parte demandante en contra del auto del 5 de mayo de 2023 que ordenó la terminación del proceso por desistimiento tácito y ordenó el archivo del proceso.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, por auto del 13 de noviembre de 2019 admitió la demanda ordinaria laboral de primera instancia promovida por Karina Sofía Arrieta Espitia en contra de Estudios e Inversiones Médicas S.A. – ESIMED S.A.

Por memorial radicado ante la oficina de apoyo judicial el 4 de marzo de 2020, el apoderado de la parte demandante adjunta soportes de citación para notificación personal con resultado negativo y solicitó autorización para cambiar la dirección en la que serían enviadas las siguientes citaciones, a lo cual accedió el despacho en auto del día 12 de los mismos mes y año. Más adelante, el apoderado de la activa aporta copia de mensaje de datos del 24 de agosto de 2020 remitido al correo electrónico registrado en el Certificado de Existencia y Representación de la demandada y solicita se proceda por parte del despacho a notificar a la demandada en los términos del Decreto 806 de 2020, vigente para la época.

Por auto del 5 de mayo de 2023, según el sistema de información judicial, el despacho dispuso la terminación del proceso en aplicación de la figura de desistimiento tácito, regulada en el artículo 317 del Código General del Proceso y ordenó el archivo de las diligencias con el retiro del registro activo en el sistema. Para fundamentar su decisión, indicó que habían transcurrido más de doce (12) meses desde la fecha de admisión de la demanda sin que la parte actora hubiere realizado gestión alguna para notificar a la sociedad demandada, por lo cual corresponde la aplicación de esta sanción por inactividad ya que la continuación del proceso depende exclusivamente de su actuación y no del Juez.

En mensaje de datos del 9 de mayo de 2023 el apoderado de la parte demandante formula recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la providencia anterior, indicando que por su parte sí se había intentado realizar una notificación a la demandada ESIMED S.A. y que, por memorial se solicitó al Despacho que se notificara a la misma mediante el correo electrónico institucional, bajo los presupuestos del Decreto 806 de 2020. Asevera que en el año 2021 el país se

encontraba bajo emergencia de salud pública ocasionada por el covid-19 lo que fomentó la paralización de muchos procesos judiciales, y que en otros procesos iniciados contra la misma demandada, ante la inactividad de la parte, el Despacho de conocimiento requería para su notificación o en su defecto ordenaba el archivo administrativo del expediente conforme el artículo 30 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, pero no se aplicaba la figura del desistimiento tácito, en razón a que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores, se han pronunciado acerca de la imposibilidad de dar por terminados los procesos conforme lo dispuesto en el artículo 317 del Código General del Proceso dado que, por el principio de legalidad, las sanciones deben estar previstas en el ordenamiento jurídico y no es posible su aplicación de manera analógica o extensiva, además porque en materia de procedimiento laboral existe la figura de la contumacia del artículo 30 del estatuto adjetivo laboral que debe ser aplicada de manera directa.

Al momento de resolver el recurso de reposición, el Juez de conocimiento manifestó que la sentencia C 868 del 3 de noviembre de 2010 de la Corte Constitucional, revisó la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 1149 de 2008 que modificó el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que limitó la aplicación del desistimiento tácito a los procesos civiles y de familia, norma que en la actualidad no se encuentra vigente. Afirmó que el artículo 317 del Código General del Proceso no limitó su utilidad a las especialidades referidas y, por el contrario, indicó que era aplicable en todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad, lo que habilitó su uso en materia laboral, y si el legislador expresamente no excluyó para la especialidad laboral la figura del desistimiento tácito, no habría razón por la cual debe dejarse de aplicar esta norma, menos ciñéndose a jurisprudencia basada en una norma anterior, que difiere con la que actualmente rige el asunto. Así entonces, resolvió negativamente el recurso de reposición y concedió la alzada a la parte.

Aceptado el recurso y puesto en traslado para que se presentaren alegatos de conclusión, no se allegó pronunciamiento alguno por parte de los integrantes del contradictorio.

COMPETENCIA

Principio de Consonancia art. 66A del C.P. T. y S.S., adicionado, artículo 35 de la Ley 712 de 2001.

PROBLEMA JURÍDICO

Determinar si la figura del desistimiento tácito regulada en el artículo 317 de Código General del Proceso puede ser aplicada en la especialidad laboral y si, en consecuencia, hay lugar a confirmar la decisión del Juez A quo de ordenar la terminación del proceso y su subsecuente archivo.

CONSIDERACIONES

El desistimiento tácito es una figura regulada en el artículo 317 del Código General del Proceso y permite la terminación anticipada o anormal del proceso, procede cuando la parte que promovió un trámite judicial recae en la inactividad y por esta causa, se presenta una paralización en el trámite procesal.

En no pocos pronunciamientos la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre este asunto, denotando una posición pacífica e invariable en la que recuerda que, a diferencia de otras especialidades, el Juez laboral es garante de los derechos de los trabajadores y por tanto cuenta con amplias facultades para impulsar oficiosamente un proceso cuando se encuentra en un estado de paralización injustificada, siendo su principal herramienta la dispuesta en el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que le otorga la calidad de director del proceso, y representa que, además de la parte, el Juez siempre estará habilitado para ejercer las acciones que considere necesarias para llevar el proceso a buen término.

Esto significa que el Juez puede, según los artículos 49 y 53 del estatuto procesal, rechazar actos que impliquen dilaciones o interfieran con la eficacia del proceso; conforme los artículos 54 y 61, decretar oficiosamente las pruebas que considere indispensables para la resolución de un asunto y ordenar la comparecencia de las

partes a fin de interrogarlas libremente sobre los hechos controvertidos, conforme el artículo 59 de la misma normativa. Todas estas facultades por sí mismas, deja sin fundamento la premisa de la paralización del proceso por causa exclusiva de la parte del artículo 317 del Código General del Proceso.

Por otra parte, el artículo 30 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 17 de la Ley 712 de 2001, expresamente regula los casos en que se configura la contumacia, y provee de los mecanismos necesarios para que, una vez sea instaurada una demanda, se logre la continuidad en el proceso hasta lograr la emisión de la sentencia de instancia, sin importar si alguna de las partes o ambas, han dejado de asistir a las diligencias programadas por el despacho. En los casos que no haya una oportuna notificación de la pasiva, que la norma enmarca en los seis meses siguientes a la emisión del auto admisorio de la demanda, se prevé el archivo de las diligencias, sin que en ningún momento suponga la terminación del proceso, ya que tiene el carácter de provisional y, por tanto, podrá reactivarse en cualquier momento a petición de parte.

Para el efecto, pueden consultarse los autos AL1986 de 2021; AL 3085 de 2018; AL 6054 de 2017; AL 1290 de 2017; entre otros, así como las sentencias de tutela STL 1456 de 2022; STL 2590 de 2021 y STL 12071 de 2020; entre otras.

Así las cosas, resulta desacertada la aplicación por el *a quo* de las consecuencias previstas en el artículo 317 del Código General del Proceso, no precisamente por lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C 868 del 3 de noviembre de 2010, que tampoco riñe con lo aquí preceptuado, sino en razón a la guarda de las garantías de los derechos de los trabajadores, las potestades de impulso oficioso que la Ley le da al Juez del Trabajo y a la regulación especial que la legislación laboral aborda respecto a este tema, quedando así excluida la posibilidad de aplicación por analogía de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

En atención a lo explicado, la decisión arribada por el *a quo*, se considera contraria al espíritu y las disposiciones que rigen el procedimiento laboral, por lo que se

REVOCARÁ la providencia que se revisa, para en su lugar, ordenar la continuación del proceso, ya sea, a petición de parte, en caso que accione los mecanismos propios de impulso procesal o, en uso de las facultades oficiosas del despacho, conforme a la Ley.

Sin costas en esta instancia, al no haberse causado.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto de fecha cinco (5) de mayo del año dos mil veintitrés (2023) proferido por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, y ordenar continuar con el trámite del proceso, en los términos expuestos en precedencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
No 195 del 15 de noviembre de 2023.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala>

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5b5897b058f0a381b5f878ad47384073a0986df31965e374d4707b16a2ab57a4**

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>